

Las cuatro singularidades del Gobierno de Michelle Bachelet¹

The four singularities of the Michelle Bachelet government

CARLOS HUNEEUS

Profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y Director Ejecutivo de la Corporación CERC

Recibido: 22/01/08

Aprobado: 15/02/08

RESUMEN

El artículo analiza la gestión del Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en torno a cuatro factores. En primer lugar, es una mujer, un hecho singular en la política comparada y en Chile, un país con fuertes rasgos machistas; en segundo, su agenda de Gobierno, con políticas para aumentar la participación de las mujeres en el Gobierno, con un criterio paritario, políticas para promover el acceso de las mujeres al trabajo, y medidas destinadas a enfrentar las desigualdades económicas y fortalecer los derechos de los trabajadores, que han sido muy cuestionadas por la derecha y los gremios empresariales. En tercer lugar, Bachelet tuvo una corta experiencia en gestión de Gobierno, iniciada recién el 2000, que le ha hecho difícil comprender las complejidades del poder y dar una eficaz conducción a su Gobierno. Y, por último, por ser la cuarta presidenta de Gobiernos exitosos de la Concertación establecidos desde 1990, después de la dictadura del general Pinochet cuyos partidos están cansados y con debilidades internas, el Gobierno enfrenta tareas más políticas y económicas más complejas que los anteriores y hereda graves problemas del Gobierno anterior del presidente Lagos.

Palabras claves: Presidencialismo, democratización, mujeres en política, Gobierno, América Latina.

ABSTRACT

The article analyse the performance of Michelle Bachelet's government around four issues. First, she is a woman, an unique situation in comparative politics and in Chile, with a society with strong *machismo*. Second, the ambitious agenda of the government, with the expansion of participation of women in governmental positions (*Gobierno paritario*), with policies to encourage women's entrance to job market, together with policies to diminish economic and social inequalities and strengthening trade unions, which have been rejected by the right and business organizations. Third, Bachelet had a short experience in government, being minister in 2000, which explains the difficulties she have had to understand the complexities of power and the limits to coordinate the cabinet. Finally, she is the fourth president of the *Concertación*, which means that she faces a more complex economic and political scenario, but with weaker resources, because the parties are organizationally weaker than before, and inherited severe problems.

Key words: Presidentialism, democratisation, women in politics, government, Latin America.

El desarrollo político de Chile ha tenido interés internacional por la continuidad de sus Gobiernos de la Concertación por la Democracia —la coalición de partidos de centro (PDC y PRSD) e izquierda (PS y PPD) que ha ejercido exitosamente el poder ejecutivo desde 1990— después del largo y represivo régimen del general Augusto Pinochet (1973-1990), que provocó heridas en el país que existen hasta hoy². La continuidad de los Gobiernos de la misma coalición constituye una excepción en las democracias de la «tercera ola», especialmente en América Latina, pues las primeras Administraciones, después de los regímenes militares, entregaron la Presidencia a un candidato de la oposición elegido por la ciudadanía, para manifestar su rechazo a su deficiente gestión³.

La actual presidenta, Michelle Bachelet (PS) (2006-2010), encabeza la cuarta Administración, algo diferentes de las anteriores. Los dos primeros presidentes, Patricio Aylwin (1990-1994) y Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) eran del PDC y fueron elegidos por una amplia mayoría en primera vuelta y el tercero, Ricardo Lagos (2000-2006), perteneció a los partidos de izquierda de la Concertación, PS/PPD, y fue elegido por un *ballotage*, superando en la primera vuelta por escasos 31.000 votos al candidato de la derecha, Joaquín Lavín (UDI). Bachelet también se impuso en segunda vuelta, con el 53,50 por ciento de los votos, derrotando al empresario Sebastián Piñera, del Partido Renovación Nacional (RN), que apoyaba la Unión Demócrata Independiente (UDI), el otro partido de oposición y que obtuvo el 46,50 por ciento de los votos. Bachelet había ganado ampliamente la primera vuelta, el 11 de di-

ciembre de 2005, simultánea a las elecciones parlamentarias, con el 45,95 por ciento de las preferencias⁴. Hubo, por ende, una cierta alternancia de poder entre los partidos, lo cual favoreció la sobrevivencia de la coalición. Bachelet, por otra parte, es la primera mujer en América del Sur que llega a la Presidencia a través de unas elecciones⁵.

Esta continuidad no fue fácil de conseguir porque, a pesar de que los partidos de Gobierno ganaron ampliamente los cinco comicios legislativos, logrando una mayoría en la Cámara de Diputados, ninguno de los tres primeros presidentes tuvo mayoría en el Senado. Los «senadores designados» (nueve, junto a 38 senadores elegidos) en su mayoría apoyaron a la oposición, dándole el control de la Cámara Alta. La reforma constitucional de 2005⁶, permitió a la Concertación alcanzar la mayoría del Senado, pero fue durante un breve periodo, dada las divisiones en los partidos. Uno de los tres senadores del PPD, Fernando Flores, abandonó el partido, como consecuencia de su disputa por las elecciones internas que perdió, y otro del PDC, Adolfo Zaldívar, fue expulsado, a fines de 2007, por reiteradas críticas públicas a la Concertación y a la directiva de su colectividad. Su expulsión provocó la renuncia de cinco diputados, en solidaridad con él, y esto hizo que la Concertación perdiera la mayoría en la Cámara baja, que había controlado desde 1990. La situación se volvió delicada para el Gobierno porque la oposición pudo ejercer con más fuerza su facultad fiscalizadora. Buena parte de la literatura especializada consideró que estos Gobiernos divididos, presentaban un escenario institucional poco favorable a la viabilidad del presidencialismo.

A pesar del difícil escenario político, estos Gobiernos lograron consolidar y profundizar la democracia, con la continuidad del general Pinochet como comandante en jefe del Ejército durante ocho años después de dejar La Moneda. Esta decisión fue apoyada por la Constitución de 1980 y respaldada por los partidos de derecha —RN y UDI— y por los gremios empresariales, que vieron su permanencia en ese cargo como una barrera para impedir posibles excesos de los Gobiernos de la Concertación. Este hecho ilustra la gran desconfianza que tenían esos actores hacia el nuevo Gobierno. Pinochet, tras abandonar la dirección del Ejército en 1998, asumió como senador vitalicio.

Y, además, estos Gobierno tuvieron un buen desempeño económico, con un crecimiento promedio anual, desde 1990 a 2005, de 5,5 por ciento. El producto per capita subió, desde 7.200 dólares en 1992, a 13.200 dólares el 2006, la inflación cayó a niveles bajísimos y la pobreza disminuyó del 40 por ciento en 1990 al 13,6 en 2006⁷. La economía chilena está ampliamente integrada en el mercado mundial y se han suscrito acuerdos de libre comercio con EE.UU., la Unión Europea, China, Japón y otros países.

No ha sido fácil la tarea para Michelle Bachelet por cuatro factores que es necesario tomar en cuenta al analizar su gestión. En primer lugar, es una mujer —un hecho singular en un país con fuertes rasgos machistas, incluso en los partidos— que, además, se ha propuesto dar un fuerte impulso al fortalecimiento de los derechos de las mujeres. En Chile, las mujeres tienen una baja participación en el mercado laboral —sólo el 37 por ciento tra-

baja fuera del hogar— y un acceso limitado a puestos superiores del sistema político. En el Congreso, sólo 4 de los 80 senadores elegidos, en las cinco elecciones senatoriales desde las de 1989, han sido mujeres; en la Cámara de Diputados, hay una cuota superior de mujeres, aunque baja: 5,8 por ciento, que fueron elegidas en 1989 entre los 120 diputados. En las elecciones siguientes subieron lentamente, hasta alcanzar el 15 por ciento en 2005. En el Poder Judicial, recién en octubre de 2001 ingresó la primera mujer a la Corte Suprema y cuando Bachelet entró a La Moneda, había una segunda mujer entre sus 21 ministros.

En segundo lugar, su Gobierno ha sido difícil porque se propuso enfrentar deficiencias en el proceso económico y social, especialmente la desigualdad, y fortalecer los derechos de los trabajadores, un asunto fuertemente cuestionado por la derecha y los gremios empresariales. En tercer lugar, Bachelet tenía una corta experiencia en gestión de Gobierno —iniciada recién en 2000— que hizo difícil la constitución de un equipo de Gobierno eficiente y con una conducción adecuada. Y, por último, ser la cuarta presidenta de unos Gobiernos exitosos de la Concertación, pero cuyos partidos están cansados y enfrentan tareas políticas y económicas más complejas que los anteriores. Bachelet, además, hereda graves problemas, como el de la educación, que produjo una masiva protesta escolar («la rebelión de los pingüinos») al comienzo de su mandato, y el Transantiago, que ha sido el principal problema de su gestión. Es a partir de este contexto que se debe evaluar su desempeño, el cual, al cumplir la mitad de su período de cuatro años, es bastante positivo.

El artículo analiza el Gobierno Bachelet en torno a estos cuatro factores.

LA CARRERA POLÍTICA DE MICHELLE BACHELET

Es interesante conocer cómo ha llegado una mujer a la Presidencia de la República, un hecho excepcional en la política comparada. Cristina Kirchner, elegida presidenta de Argentina el 2007, tuvo una carrera política junto a su marido, Néstor, que ejerció la Presidencia antes que ella y logró un fuerte control de su partido, el peronista, que la llevó de candidata. Si Hillary Clinton gana las primarias de su partido y los comicios presidenciales en Estados Unidos, en noviembre 2008, habrá que recordar que su marido, Bill Clinton, fue presidente (1990-1998) y terminó su Gobierno con alta popularidad⁸.

Bachelet tiene una biografía distinta⁹, porque tiene una carrera política propia. Es una mujer separada, madre de tres hijos, y fue una *outsider* de la élite, puesto que no formaba parte de los dirigentes que dieron origen a la coalición gobernante, a comienzos de los años 80, al fundar la Alianza Democrática, a diferencia de Aylwin y Lagos. No había sido presidenta de su partido, como los tres inquilinos que le antecedieron en La Moneda, y sólo tuvo responsabilidades de nivel intermedio, cuando fue elegida para el Comité Central, a fines de los años 90. Tampoco fue parlamentaria, como Aylwin, Frei y de todos los presidentes elegidos entre 1932 y 1973, que habían sido senadores¹⁰. Médica de profesión, desde el retorno de la democracia, trabajó en el ministerio de Salud en cargos de nivel intermedio. Más tarde, fue desig-

nada asesora del Ministro de Defensa, porque había sido la mejor alumna de su promoción en el curso de postgrado, impartido por la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE). ANEPE le confirió una beca para seguir un programa de postgrado en una Academia de seguridad nacional en los Estados Unidos, en el que participaron norteamericanos y latinoamericanos y, de nuevo sobresalió, graduándose como la primera alumna.

Su experiencia de Gobierno fue breve y tardía, pues comenzó en 2000, cuando el presidente Lagos la nombró ministra de Salud. En enero de 2002, su gestión fue evaluada críticamente y fue nombrada ministra de Defensa. Este hecho tuvo repercusiones en la opinión pública porque fue la primera mujer en ejercer ese cargo en América Latina y por el rol político que tuvieron los militares en el pasado reciente de Chile.

Bachelet no buscó la Presidencia. Fue un hecho puntual el que la catapultó a ese escenario: una imagen, difundida por los medios de comunicación, en un tanqueta militar, en junio de 2002, coordinando acciones militares de apoyo a los pobladores de los sectores populares afectados por las lluvias de invierno. Las encuestas reafirmaron su popularidad durante 2003, con motivo de los 30 años del golpe que derribó al Gobierno de Salvador Allende (PS) y a la Unidad Popular (1970-1973), cuando los medios de comunicación difundieron los reportajes sobre la toma del poder por los militares y la dura represión aplicada. La biografía de Bachelet fue el reflejo de ese dramático pasado: era hija de un general de la Fuerza Aérea, Al-

berto Bachelet, que había ocupado un alto cargo en el Gobierno de Allende y que fue detenido y torturado después del golpe, a consecuencia de lo cual murió a principios de 1974. Estuvo exiliada cinco años, la mayor parte del tiempo en la RDA, donde terminó sus estudios de medicina.

Recién, en diciembre de 2003, se le planteó la posibilidad de ser candidata presidencial y sólo en junio del año siguiente decidió postular, respaldada por los dirigentes del PS, por su excelente apoyo en las encuestas. Tres meses después, abandonó el Gabinete para buscar la nominación de los demás partidos de la Concertación. Soledad Alvear (PDC), ministra de Relaciones Exteriores, también se presentó a la candidatura presidencial y luchó por la nominación de su partido, pero renunció a favor de Bachelet, al poco tiempo, porque no logró mejorar su apoyo en las encuestas. Bachelet se convirtió entonces en la abanderada de la coalición, sin que se realizaran primarias, a diferencia de las elecciones de 1993 y 1999¹¹.

Esta tardía y rápida marcha a la nominación presidencial tuvo sus consecuencias porque no tuvo el tiempo necesario para reunir a colaboradores que le ayudaran a ejercer la Presidencia y no pudo prepararse suficientemente para enfrentar los enormes desafíos de esa responsabilidad. Sus ideas, acerca de lo que pensaba hacer y cómo lograrlo, fueron madurando en el breve y agitado tiempo de la campaña electoral y tuvo que iniciar un acelerado aprendizaje político para paliar las limitaciones de su breve carrera política. Además, tuvo que enfrentarse a la oposición de la UDI y RN, más unida que antes, más co-

ordinada en el Congreso y en las elecciones en la *Alianza por Chile*, y que había seguido una política de mayor confrontación que el que tuvieron sus antecesores.

Estas limitaciones no fueron asumidas por los dirigentes de los partidos de la Concertación, ni por sus parlamentarios, que criticaron algunas de sus decisiones y cuestionaron la marcha de su Gobierno. Una parte de los dirigentes del PS desconfió de su capacidad para ejercer la Presidencia y criticaron el desempeño de algunos de sus ministros, desviando tempranamente la atención en los problemas del Gobierno hacia la elección presidencial de 2009.

LAS CONDICIONES INICIALES DEL GOBIERNO BACHELET

Sin embargo, el Gobierno de Bachelet tuvo la ventaja, respecto de los anteriores, de que el general Pinochet no era ya un actor político, un asunto que complicó bastante al presidente Aylwin y, en menor medida, a Frei. Este cambio fue el resultado de un largo y complejo proceso sobre las violaciones de los derechos humanos, que incluyó el procesamiento y condena a prisión de numerosos oficiales de las FFAA, y que afectó al general Pinochet. Éste fue desahogado de su cargo de senador vitalicio por la Corte Suprema, en agosto de 2000, pocas semanas después de su regreso de Londres donde fue detenido en Octubre de 1998 por una resolución de la justicia española. En junio del 2004, su figura se desplomó ante sus partidarios, cuando el Senado de EE.UU. hizo públicas las millonarias cuentas privadas secretas que poseía, junto a miembros de su familia, en un

banco de Washington DC. Cuando falleció, en diciembre del 2006, sus adherentes le dieron una pasiva despedida.

Pero el Gobierno de Bachelet tenía que enfrentar desafíos más complejos que los anteriores. En primer lugar, porque los importantes avances políticos y económicos y el mayor bienestar económico de la población, incentivaba nuevas necesidades, especialmente bienes y servicios de mayor calidad. Y era más difícil que antes porque los partidos de Gobierno estaban más debilitados, especialmente el PPD y el PDC, más agotados por la larga permanencia en el Gobierno y con conflictos internos. La Concertación, creada para derrotar a Pinochet en el plebiscito sucesorio de 1988, restableció y consolidó la democracia, pero mostraba signos de gran cansancio porque esos objetivos se habían alcanzado y no se habían planteado otros nuevos que le dieran dinamismo. Se evidenciaron falencias en el proceso político, con una amplia apatía y un cinismo político de la opinión pública. Un gran porcentaje de jóvenes no se inscribe en los registros electorales y no vota en las elecciones; hay un sistema electoral binominal que distorsiona la competencia y perjudica a los partidos; un Estado que no se ha modernizado, y el buen desempeño económico se encuentra limitado por las enormes desigualdades, por la calidad de la educación y las malas condiciones del trabajo para una mayoría de los asalariados, que tienen, además, bajas remuneraciones y precariedad del empleo.

Los Gobiernos de la Concertación han seguido una política económica de «crecimiento con equidad» logrando buenos resultados,

aunque la disparidad entre buenos indicadores económicos y evaluaciones subjetivas críticas demuestra que el impacto del crecimiento económico en el desarrollo político es más difícil que lo indicado por los estudiosos de los fundamentos económicos de la democracia¹². La economía puede caminar por un lado y la política por otro, sin que aquella tenga una relación con ésta.

Esta política económica ha buscado reformar las instituciones —implantadas tras la transformación económica neoliberal, impulsada por el régimen militar— para lograr una economía social de mercado¹³. Pero estas reformas han sido parciales, por el rechazo de los partidos de derecha, que siguen adheridas al modelo económico establecido por el autoritarismo. El énfasis de los Gobiernos democráticos en la estabilidad macroeconómica y en asegurar la confianza de los empresarios, como una de las claves del crecimiento, hizo que se atendieran principalmente los intereses de éste grupo, sin un esfuerzo similar por velar por los derechos económicos y sociales de los trabajadores, fuertemente restringidos por la dictadura. Ello ha creado una gran asimetría entre un empresariado con gran poder e influencia, y un debilitado movimiento de trabajadores.

En segundo lugar, los desafíos de Bachelet también son complejos porque sucede al presidente Lagos, que había impulsado una activa labor como jefe de Gobierno —en comparación a Aylwin y Frei, que delegaron más poder en sus ministros— y terminó su mandato con un alto apoyo ciudadano¹⁴. Formó un equipo de asesores de su confianza —una docena de profesionales de alto nivel del PS

y el PPD (el «segundo piso») — que realizaron funciones paralelas al Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Lagos intervino en el ámbito de las competencias de algunos Ministerios, afectando en forma negativa la implementación de algunas políticas, como fue el Transantiago. Esto produjo una centralización decisoria que complicó a sus ministros. Empleó un estilo de alta visibilidad pública, correspondiendo a la *presidencia personal* de Lowi¹⁵, que fortaleció su poder y, con ello, su influencia en la marcha del Gobierno. Ese estilo de liderazgo y de conducción de Gobierno produjo una difícil relación con el PDC, que consideró que no tenía una participación en el Gobierno de acuerdo a su peso político, y el senador Adolfo Zaldívar lo criticó públicamente, lo que le ganó la simpatía de los militantes del partido, que lo eligieron presidente de la colectividad (2002).

Los desafíos del Gobierno son complejos, además, porque el sistema político corresponde a una democracia de consenso, en la tipología de Arend Lijphart¹⁶, con una menor concentración de poder en la Presidencia, contrariamente a lo escrito por los estudiosos del presidencialismo, que la ven sin mayores limitaciones de otros poderes, con la excepción del Congreso¹⁷.

DEFINICIONES ORGANIZATIVAS Y PROGRAMÁTICAS DEL GOBIERNO DE BACHELET

Bachelet buscó darle una singularidad propia a su Gobierno en torno a dos ejes. Por un lado, a través de un fuerte impulso a la participación de la mujer, constituyendo un

gabinete paritario, acompañada de otras iniciativas para favorecer su ingreso al trabajo¹⁸. A las mujeres les asignó Ministerios importantes, como la Secretaría General de la Presidencia, Defensa y el de Vivienda y Urbanismo. También extendió la paridad de género a la designación de subsecretarios, intendentes y gobernadores, lo que implicó reclutar un gran número de mujeres. Esto no estuvo libre de dificultades, porque fueron evaluadas más críticamente que los hombres y la prensa dio mayor atención a sus errores, más bien por razones de género.

Por otro lado, a través de una red de protección social, para disminuir las desigualdades y atender las necesidades de los trabajadores, lo que implicaba introducir un importante cambio en la política económica, respecto de las Administraciones de Frei y Lagos, que priorizaron las preocupaciones empresariales. Asimismo, Bachelet renovó fuertemente la élite de Gobierno, con nuevos rostros, la mayoría sin experiencia política, lo cual tuvo algunos costos por una demoras para encontrar su ritmo.

En la formación de su gabinete, Bachelet no tomó ningún ministro que hubiera trabajado en el gabinete de Lagos¹⁹ —un cambio respecto a la formación de los anteriores Gobiernos que buscaron una cierta continuidad para atenuar los costos por la inexperiencia en la gestión gubernativa²⁰—, y no todos estaban afiliados. El ministro de Hacienda, Andrés Velasco, no era militante de ningún partido de la Concertación. Estaba radicado en EE.UU. desde el exilio de su padre, en 1976, era profesor de economía en la Universidad de Harvard y tuvo dificultades para desempeñarse como respon-

sable de la dirección económica, porque desconocía las complejidades de la política chilena. Sin el apoyo de un partido, se vio debilitado por las bancadas oficialistas y tampoco se esmeró por tener buenas relaciones con los parlamentarios. Su gestión fue criticada, además, por los resultados del bajo crecimiento económico en 2006, un 4 por ciento, bastante inferior al 6,3, de 2005 y al 6,2, de 2004. En 2007 el crecimiento alcanzó el 5,1 por ciento.

Bachelet compensó la menor experiencia política de algunos de sus ministros con dos personalidades que sí la tenían: Andrés Zaldívar (PDC), a quien nombró ministro del Interior. Zaldívar era un destacado político antes del golpe militar de 1973, fue un activo opositor a la dictadura y senador en la democracia (1990-2006). Y Alejandro Foxley (PDC), ministro de Relaciones Exteriores, que fue ministro de Hacienda con Aylwin y, después, presidente del PDC y senador (1998-2006). Pero Zaldívar no se adaptó a las singularidades de la función ministerial, empleó un estilo más acorde con la labor parlamentaria y cometió errores que lo debilitaron, pues no evaluó la profundidad de la crisis escolar de mayo-junio 2006. Bachelet le pidió la renuncia al cabo de cuatro meses, nombrando a Belisario Velasco (PDC). Foxley ha tenido un margen de acción limitado porque la presidenta, desarrolla una activa agenda internacional, con autonomía de éste.

OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS Y LOGROS DEL GOBIERNO

El énfasis programático del Gobierno Bachelet es avanzar hacia una disminución de las desigualdades, a partir de una red de protec-

ción social, que comienza en la infancia, continúa en la educación y el trabajo y se extiende hasta la jubilación. Que era precisamente la principal debilidad de los Gobiernos de la Concertación, incapaces de disminuir las desigualdades económicas y sociales. Los partidos de izquierda tampoco habían enfrentado problema —todavía traumatizados por el fracaso del Gobierno del presidente Salvador Allende de la Unidad Popular (1970-1973)— y mantuvieron una postura reactiva y de tibieza ante los empresarios.

En Chile, el coeficiente Gini alcanzó un 0,54, una excepción en América Latina y también en el mundo, que no comenzó en 1990, ni 1973, sino antes²¹. Existe, por tanto, una clara percepción subjetiva de las desigualdades económicas: más de dos tercios de los chilenos opina que el crecimiento económico ha beneficiado sólo a los ricos, uno de cada cinco considera que ha beneficiado a los pobres, uno de cada cuatro opina que ha beneficiado a la mayoría de los chilenos y una minoría siente haberse beneficiado (entre 15 y 20 por ciento en las diversas mediciones desde 1993)²².

La persistencia en el tiempo de las desigualdades del ingreso demuestra que se apoya en complejas raíces económicas y políticas, cuya modificación requiere decisiones políticas y una mayor organización de los grupos subordinados²³, especialmente de los trabajadores, lo cual provoca rechazo en la oposición de los grupos más ricos²⁴. Los trabajadores fueron muy perjudicados por el autoritarismo. Una de las primeras Leyes que aprobó el Gobierno Bachelet fue regular la subcontratación de trabajadores, que se había conver-

tido en una fuente de abusos por una parte de los empresarios. Fue una señal muy potente sobre la voluntad política del Gobierno, confirmada después por una efectiva fiscalización de su aplicación en los principales sectores de la economía, en los que más se recurría a la subcontratación. El ministerio del Trabajo adquirió un protagonismo, que sólo había tenido en el Gobierno Aylwin, y provocó una abierta irritación de los gremios patronales, especialmente la Confederación de la Producción y el Comercio. Pero las políticas a favor del trabajo se encontraron con un clima de opinión pública muy crítico con los empresarios. Más del 80 por ciento de la población cree que tienen mucho poder, frente a un reducido 25 por ciento que piensa que los sindicatos tienen demasiado poder; se les ve interesados en ganar dinero (67 por ciento), son explotadores (46 por ciento), enemigos de los sindicatos (38 por ciento), y una pequeña minoría reconoce las virtudes resaltadas a través de la prensa: competentes (19 por ciento), arriesgados (14 por ciento), innovadores (14 por ciento), se entienden con el personal (9 por ciento) y honestos (3 por ciento)²⁵.

Este énfasis hacia una menor desigualdad se ha legitimado por el escenario de relativa opulencia, como resultado del fuerte aumento del precio del cobre, que subió un 350 por ciento desde 2005 y que representa más del 50 por ciento de las exportaciones. El cobre ha proporcionado al erario nacional gran cantidad de recursos, con más de 13.000 millones de dólares hasta diciembre de 2007 y el Gobierno ha decidido ahorrar esos recursos para apoyar la reforma previsional y servir de respaldo al fisco, cuando el precio caiga, con-

servándolos fuera del país para proteger la moneda nacional y, con ello, mantener el ímpetu de las exportaciones, que representan alrededor del 38 por ciento del producto, rechazando destinarlos a mayor gasto, confirmando la política de responsabilidad fiscal seguida desde 1990.

El aumento de los recursos públicos, provenientes de las exportaciones de cobre, ha provocado presiones de los trabajadores para lograr mejoras salariales, especialmente en sectores exportadores, caracterizado por la precariedad del trabajo y los bajos salarios. Una huelga contra una de las principales empresas del sector forestal, en 2007, puso de manifiesto esta situación, y tuvo un enorme impacto en la opinión pública. Concluyó gracias a la mediación de un obispo católico, lo que llevó a que la Iglesia retomara la preocupación social que tuvo en el pasado. El presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, reconocido por su defensa de los derechos humanos durante la dictadura, planteó la necesidad de que los trabajadores recibieran un «salario ético», superior al mínimo. Esta propuesta fue tomada por la presidenta y, el 23 de agosto de 2007, se constituyó el Consejo Asesor Presidencial para el Trabajo y la Equidad, bajo el lema «Hacia un Chile más justo», que recibió el encargo de preparar iniciativas de políticas públicas que fortalecieran los derechos económicos y sociales de los trabajadores y disminuyeran las desigualdades.

Las reformas neoliberales del autoritarismo debilitaron fuertemente a los sindicatos y todavía no se han recuperado en democracia. En 1990, sólo el 19,2 por ciento de la

fuerza laboral estaba sindicalizada. Esta cifra bajó desde 1995, llegando al 14,5 por ciento en 1999, para subir levemente hasta el 15,6, en 2004 y disminuir en los años siguientes, llegando al 14,5 por ciento, en 2006. Esto tiene como consecuencia el bajísimo porcentaje de trabajadores que participa en la negociación colectiva, para reajustar sus remuneraciones y mejorar las condiciones de trabajo. En 1991 el 10,1 por ciento de la fuerza laboral usaba este mecanismo y alcanzó al 5,6 por ciento, en 1999 y el 4,5 en 2003, el menor porcentaje en toda la democracia, para situarse en un débil 5,4 por ciento, a finales del Gobierno de Lagos.

La principal iniciativa, a favor de los trabajadores, es la reforma del sistema de pensiones, privatizado durante el autoritarismo²⁶, que se basó en la capitalización individual en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), unas entidades privadas con fines de lucro a cargo del sistema y que reemplazaron al antiguo sistema de reparto. La modificación fue la creación de un fondo solidario, financiado por el Estado, para permitir la jubilación de aquellos trabajadores que no podían recibir una pensión mínima, por sus bajas remuneraciones. Esto significa dar una pensión universal, a partir de los 65 años, lo que constituye un cambio radical al esquema implantado por la dictadura, basado sólo en las cotizaciones individuales de los trabajadores.

El Gobierno Bachelet también se propuso mejorar la calidad de las políticas. Una gran tarea porque se enfrenta con un Estado que no se ha modernizado y tiene una grave debilidad institucional, derivada del sesgo ideo-

lógico que guió la transformación económica del autoritarismo. Esta debilidad se ha manifestado, con claridad, en la política de Obras Públicas, que tuvo un fuerte empuje con la Ley de concesiones a empresas privadas, aprobada durante el Gobierno Aylwin y que sirvió de apoyo a una política de construcción de obras de infraestructura en el Gobierno de Frei, bajo el liderazgo del ministro Ricardo Lagos. Las concesiones asignadas a las empresas privadas superaron las capacidades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para controlar su calidad y se produjeron irregularidades, al externalizar algunas tareas a privados. Hubo diferencias de criterio en la evaluación, entre el Ministerio y las empresas concesionarias, que terminaron en arbitrajes adversos al Gobierno. A través de negociaciones, cuyo contenido se desconoce, se había convertido en una práctica renegociar las condiciones de las concesiones asignadas, para corregir errores o falencias. 12 de las 16 concesiones, asignadas en 1998, se habían renegociado en 2002, con un aumento promedio de su costo de un 15,4 por ciento²⁷. Por este motivo, el Gobierno Bachelet suspendió la continuidad del plan de concesiones, impulsado por el Gobierno Lagos, con la finalidad de fortalecer las capacidades fiscalizadoras del MOP y asegurar que las obras concesionadas fueran de mayor calidad.

Hasta ahora, el mayor problema del Gobierno Bachelet ha sido el fracaso del Transantiago, el ambicioso programa de modernización del transporte público en Santiago sobre la base de empresas privadas, puesto en ejecución el 10 de febrero de 2007 en toda la capital y no gradualmente, como se hizo en las grandes ciudades que modernizaron el trans-

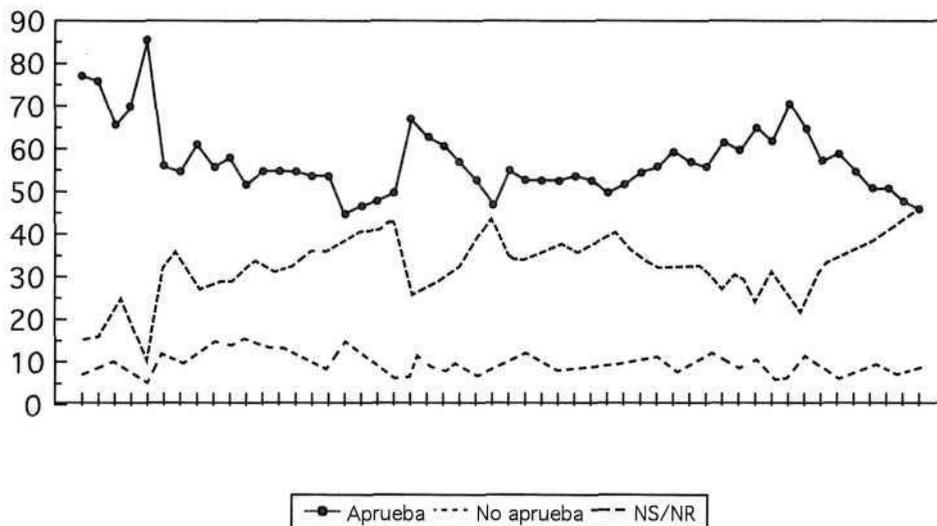
porte público. El Gobierno, los parlamentarios y los dirigentes de la Concertación han tenido que soportar el fuerte malestar de los santiaguinos, especialmente en los sectores populares, que son los que más utilizan el transporte público. El Transantiago demostró que una política mal diseñada puede perjudicar especialmente a los pobres, confirmando que las desigualdades se expresan en los servicios públicos.

El Transantiago fue iniciado por el Gobierno de Lagos, que fue el que firmó los contratos con las empresas privadas, y sus problemas derivan de su alta complejidad, subestimada por las autoridades de Gobierno, especialmente los del MOP y del ministerio de Hacienda, que no asignó los recursos para la construcción de las obras de infraestructura

para las vías exclusivas para los buses y faltó un recurso fundamental para permitir su desplazamiento. Hubo descoordinación en el Gobierno, que impulsó la construcción de autopistas concesionadas en Santiago—que benefician especialmente a los sectores acomodados y han fomentado el uso del automóvil—contradiendo el objetivo fundamental, que era promover el transporte público. También hubo graves fallas en las empresas privadas contratadas para llevar adelante el programa.

El Transantiago ha tenido un fuerte impacto en la evaluación del Gobierno porque ha hecho que los chilenos no aprueban su gestión en un 45 por ciento, según la medición de diciembre del 2007. Un empate con quienes sí la aprueban, que es una situación sin precedentes en los 17 años de democracia.

Gráfico 1
Aprobación del Gobierno, 1990-2007



P. ¿Usted aprueba o no aprueba la gestión del Gobierno que encabeza el Presidente Aylwin / Frei / Lagos / Bachelet?

Fuente: BARÓMETRO CERC, Diciembre de 2007.

SINGULARIDADES INSTITUCIONALES: LA POLÍTICA EN UNA DEMOCRACIA DE CONSENSO

Es muy difícil gobernar en un escenario institucional constituido por una democracia de consenso²⁸, que es el tipo de sistema político establecido desde la transición, pues las decisiones se adoptan considerando, no sólo el principio de la mayoría, sino también el de la minoría. En este tipo de democracia la dicotomía entre la mayoría y la minoría adquiere una relación menos antagónica, ya que la minoría tiene influencia en las decisiones del Ejecutivo y un fuerte poder en el sistema político. Esto se explica por el desarrollo político del país, dividido por el impacto del autoritarismo²⁹, confirmando la tesis de la democracia consociativa, en el sentido que un país con traumáticas experiencias del pasado necesita instaurar una democracia de consenso. El régimen no colapsó, sino que terminó según sus normas institucionales establecidas en la Constitución de 1980 y la transición a la democracia se hizo a través de un proceso de *reforma* y no de *ruptura*, bajo el principio de la legalidad. De ahí que la democratización, a diferencia del resto de las experiencias de América Latina, con la excepción del Brasil, no produjo un alejamiento de los civiles que participaron en altos cargos de Gobierno de la dictadura. La continuidad se dio en personalidades de las directivas de los dos partidos de oposición, RN y UDI³⁰, y en sus bancadas. En efecto, 14 de los 16 senadores de la UDI, elegidos en cada una de las cinco elecciones, tuvieron altos puestos en el régimen militar³¹; un 37,5 por ciento de los diputados de ambas colectividades, elegidos en las tres primeras elec-

ciones, fueron alcaldes en el autoritarismo, y el 23,7 por ciento ocupó cargos en el Gobierno, desde subsecretarios, hasta secretarios regionales ministeriales (Seremi).

La integración de la minoría se debe también a que la oposición es políticamente fuerte, porque está constituida por dos partidos, RN y la UDI, fundados durante el régimen militar por personalidades que colaboraron con éste, especialmente los de la UDI. Tiene, además, bastante apoyo electoral, como demuestra que, en el plebiscito sucesorio de 1988 que apoyó la candidatura del general Pinochet, alcanzó el 44,01 por ciento de los votos. Y en los comicios legislativos, lograron un amplio apoyo ciudadano, 34,2 por ciento en los de 1989, que aumentó al 38,7 por ciento en los del 2005, con una cantidad superior de parlamentarios, como consecuencia del sistema electoral binominal. En las elecciones presidenciales, la oposición ha sido aún más poderosa, especialmente en la de 1999, en la que, por el impacto de la crisis económica asiática y la detención del general Pinochet en Londres, se provocaron tensiones al interior de la Concertación y esto le permitió estar a un paso de derrotar al abanderado de la Concertación.

Los derechos de la minoría están cautelados a través de normas constitucionales. La Constitución establece un procedimiento rígido de reforma, con altas mayorías para aprobarla, que exige un acuerdo con la oposición. También se exigen mayorías especiales para la aprobación de las Leyes, lo cual influye en la formación de decisiones, porque requiere largas y complejas negociaciones con la oposición, con costos para la mayoría por las de-

sigualdades de poder en el sistema económico y en los medios de comunicación, que favorecen una agenda pública en que sobresalen los intereses de la derecha.

La principal instancia de integración de la minoría es el Congreso y especialmente el Senado. Chile no tiene un Congreso debilitado, como en la Argentina de Menem y Kirchner y, en menor medida, en el Brasil, países en los cuales el Legislativo transfiere una parte de sus atribuciones legislativas al Ejecutivo, que le permite gobernar por decreto en cuestiones que son materia de Ley, como establecer impuestos. Por el contrario, en Chile el Legislativo es fuerte, reafirmado por varias reformas constitucionales que han fortalecido al Senado³².

Durante el Gobierno Bachelet, la oposición ha tenido en el Congreso una postura de mayor antagonismo, que busca, como lo planteó un senador de RN y expresidente del partido, el «desalojo» de la Concertación en las elecciones del 2009³³.

El poder del Senado se expresa en la elección de altos funcionarios del Estado. En la Constitución de 1980, sólo participaba en la elección de los cinco conejeros del Banco Central. Desde una reforma constitucional de 1997, el presidente nombra a los ministros y fiscales de la Corte Suprema, con acuerdo del Senado. El Senado elige al Fiscal Nacional, que dirige el Ministerio Público, entidad autónoma creada por la reforma procesal penal, aprobada durante el Gobierno de Frei, la mayor transformación institucional hecha en democracia. Designa a los miembros del Consejo Nacional de Televisión, el órga-

no regulatorio superior de los canales de televisión, y a los miembros del Directorio de Televisión Nacional, el canal de televisión pública.

Por la reforma constitucional de 2005, el Senado elige cuatro de los diez miembros del Tribunal Constitucional, dos de los cuales son previamente nominados por la Cámara de Diputados. También nombra a los miembros del Consejo de Alta Dirección Pública (CADP), que forma parte del Sistema de Alta Dirección Pública, creado en 2003, y que tiene la finalidad de elegir a los altos directivos del Estado, pertenecientes a casi un centenar de instituciones públicas, que son de variada importancia³⁴. Esta Ley restringió el poder del presidente para nombrar con entera autonomía a colaboradores de su confianza, y ahora hay que hacerlo por concurso público y según los antecedentes de los postulantes.

Esta democracia ha ido acompañada de una política del consenso entre el Gobierno y la oposición, lo cual es perjudicial para la Concertación porque disminuye el espacio de las discrepancias que separan a los partidos, limitando por ello la competencia electoral. La experiencia de las transiciones, como la española³⁵, muestra que la política de consenso debe ser transitoria y terminar cuando la democracia se ha consolidado porque debe haber una clara diferencia entre el Gobierno y la oposición para que uno cumpla el rol que le corresponde y para que haya una genuina competencia electoral, indispensable para el desarrollo de los partidos. La ausencia de grandes diferencias entre el Gobierno y la oposición y entre los partidos debilita la calidad de la política, incentivando la apatía,

EL DEBILITAMIENTO DE LOS PARTIDOS COMO ORGANIZACIÓN

Un factor que ha complicado al Gobierno de Bachelet es el debilitamiento de los partidos de la Concertación como organización, pues han visto deteriorada su cohesión y disminuida fuertemente su capacidad de reclutamiento de afiliados, activistas y nuevos dirigentes.

Desde el punto de vista electoral, los partidos no se ven con problemas porque han mantenido una gran continuidad desde las primeras elecciones parlamentarias de 1989, cuando los cuatro partidos de la Concertación recibieron 50,9 por ciento de los votos, que ascendió al 51.8 por ciento en el 2005³⁶. Hay cambios en los apoyos a los partidos, con un debilitamiento del PDC del 26,5 por ciento al 21,4, en ambos comicios³⁷, un aumento del PPD, del 11,5 al 16,5 por ciento y una estabilidad en el PS: del 9,1, obtenido en 1989, se movió al 10,4 por ciento, en 2005.

Las causas del debilitamiento de los partidos de la Concertación tienen que ver con los costos del prolongado tiempo que controlan el Gobierno y con los errores cometidos en el pasado, cuando en las elecciones de 1993 y 1997 impulsaron campañas electorales altamente personalizadas, dejando de lado los nombres y símbolos de cada uno de ellos, con la excepción de la UDI. Los partidos históricos, el PS y el PDC, abdicaron de sus identidades históricas, lo que favoreció a los de derecha, RN y UDI, y al PPD, pero éste no se ha consolidado y no han alcanzado el objetivo propuesto por sus fundadores en 1988. Los partidos no tienen financiamien-

to público³⁸, y esto los limita considerablemente y los pone en una delicada dependencia de los aportes de empresas.

Los partidos de la Concertación sufren también las consecuencias del sistema electoral binominal. Los 120 diputados y los 38 senadores son elegidos en distritos con dos candidatos, (60 y 19 distritos respectivamente), saliendo elegido el candidato con la mayor cantidad de votos de la lista más votada, estableciendo un umbral muy alto, 33,4 por ciento, que obliga a los partidos a formar listas únicas. Para elegir los dos escaños la lista ganadora debe duplicar los votos de la siguiente lista, una situación excepcional. El binominal establece un umbral muy alto para obtener el escaño, 33,4 por ciento, obligando a los partidos a formar listas únicas, con candidatos de colectividades aliadas, que compiten duramente entre sí³⁹. Esto distorsiona la competencia, pues se produce entre los candidatos de los partidos aliados y no entre los candidatos de partidos adversarios, provocando tensiones y heridas que demoran en sanar. Para evitar estos perjuicios, el PS y el PPD no compiten entre sí desde los comicios del 1989. Han constituido un subpacto en la lista de la Concertación y presentan un candidato en cada distrito, que se enfrenta al candidato del PDC. Desde 2001, se les ha sumado el PRSD. Este pacto ha creado una situación muy difícil para el PDC, cuyos candidatos deben luchar contra tres partidos, siendo históricamente más fuerte la izquierda.

CONCLUSIONES

La presidenta Michelle Bachelet ha impulsado el cuarto Gobierno de la Concertación

ción, con singular energía, aunque con dificultades que se derivan de los cuatro factores mencionados: Primero ser mujer y dar un fuerte impulso a la participación de las mujeres en el Gobierno; segundo, disminuir las desigualdades económicas y fortalecer los derechos de los trabajadores. En tercer lugar, su corta experiencia de Gobierno, que le ha dificultado comprender cabalmente los recursos del poder, y, en cuarto lugar, encabezar el cuarto Gobierno de la Concertación, enfrentando tareas más complejas porque heredó graves problemas, como la deficiencia de la política de educación y el Transantiago. Y, por otra parte, los partidos de la Concertación están cansados y con serias debilidades. Es a partir de este contexto que se debe evaluar su desempeño y, cuando se escribe este artículo, transcurrido la mitad de su mandato, éste es positivo.

En la segunda parte de su Gobierno, Bachelet obtendrá resultados más relevantes, como la aprobación por el Congreso del proyecto de reforma previsional, cuyo financiamiento está asegurado con los intereses de los recursos del cobre, cuya alza en el mercado internacional le cayó como un maná del cielo. Si logra estos resultados, Bachelet será exitosa no sólo por el hecho de ser la primera mujer presidenta en América del Sur, elegida por el pueblo, sino también por producir un cambio en el desarrollo económico y político de Chile, que obligará a ser considerada como la primera presidenta de una nueva etapa en la historia del país. Pero para alcanzar estos resultados necesita el apoyo de los partidos de la Concertación, que deberán renovar sus rostros e ideas para poder ayudarla y para estar a la altura de los requerimientos, si quieren enfrentar, con alguna posibilidad de éxito, los comicios presidenciales y parlamentarios del 2009.

NOTAS

1. Este artículo se ha escrito en el marco del proyecto de investigación Fondecyt Nr. 1070868 sobre la presidencia en Chile. Agradezco la ayuda de Rodrigo Cuevas del CERC. Agradezco al embajador de Chile en España, Osvaldo Puccio, la invitación a participar en este número dedicado a Chile.

2. Lo hemos analizado en nuestro libro Carlos Huneeus, *The Pinochet Regime*. (Boulder, Col.: Lynne Rienner, 2007).

3. Un dramático caso fue en Argentina en 1989, pues el presidente Raúl Alfonsín, del partido radical, debió entregar el poder al peronista Carlos Menem varios meses antes del plazo constitucional, por la grave crisis económica en que terminó su Gobierno.

4. Para un análisis de las elecciones, véase Huneeus, Carlos, Berrios, Fabiola & Gamboa, Ricardo (eds.)

Las elecciones chilenas de 2005. Partidos, coaliciones y votantes en transición (Santiago: Catalonia, 2007).

5. Isabel Martínez de Perón fue vicepresidenta de Argentina, elegida en 1973 con su marido, Juan Domingo Perón, electo presidente y asumió la presidencia luego de su fallecimiento en 1974, siendo derribada por un golpe militar en 1976. Lidia Gueiler fue presidenta de Bolivia durante ocho meses, habiendo asumido, cuando fue derrocado el presidente Walter Guevara Arce, porque ella era presidenta de la Cámara de Diputados y fue derrocada por un nuevo golpe de estado en julio de 1980. Violeta Chamorro fue presidenta elegida en Nicaragua entre 1990 y 1997. En 2007, Cristina Kirchner, esposa del presidente Nestor Kirchner (2003-2007), ambos peronistas, fue elegida presidenta en Argentina.

6. Zúñiga Urbina, Francisco (coordinador) *Reforma constitucional* (Santiago: LexisNexis, 2005); Pfeffer Urquiaga, Emilio, *Reformas constitucionales 2005*. (Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2005).
7. Muñoz, Oscar *El modelo económico de la Concertación 1990-2005. ¿Reformas o cambio?* (Santiago: FLACSO Chile-Catalonia, 2007), p. 19.
8. La influencia del marido también se da en la carrera política de otras dos presidentas mujeres. Violeta Chamorro, presidenta de Nicaragua (1990-1997) se hizo conocida por dirigir el diario *La Prensa*, que asumió después del fallecimiento en 1978 de su marido, Pedro Joaquín Chamorro, que había criticado la dictadura de Somoza; Corazón Aquino, presidenta de Filipinas (1986-1992), se convirtió en una figura de la política nacional luego del asesinato de su marido, el líder opositor Benigno Aquino, al regresar del exilio en EE.UU. impuesto por la dictadura de Ferdinand Marcos.
9. Hay una buena biografía política de la presidenta, Insunza, Andrea y Ortega, Javier, *Bachelet. La historia no oficial* (Santiago: Random House Mondadori, 2005).
10. Lagos postuló a un escaño al Senado en 1989, sin lograrlo.
11. En las primarias de 1999, el PDC impulsó una dura competencia contra el abanderado del bloque PS/PPD, Ricardo Lagos, que perjudicó la postulación presidencial de éste como candidato de la Concertación.
12. Remito al lector al clásico estudio de Lipset, Seymour Martín 1959, «Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy», *American Political Science Review*, vol. LIII: 1, Marzo 1959, pp. 69-105.
13. El mejor libro sobre la política económica de la dictadura y los Gobiernos democráticos es el de Ffrench-Davis, Ricardo, *Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad. Tres décadas de política económica en Chile* (Santiago: J.C. Saez Editor, 2008), 4ª edición actualizada. Para los fundamentos económicos de los Gobiernos de la Concertación, véase Muñoz, Oscar *El modelo económico de la Concertación 1990-2005. ¿Reformas o cambio?*
14. Recibió un 71% de aprobación a su labor como presidente en la encuesta CERC de diciembre de 2005.
15. Lowi, Theodore: *The Personal Presidency* (Ithaca,: Cornell University Press, 1985)
16. En el concepto desarrollado por Lijphart, Arend, *Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries* (New Haven: Yale University Press, 1999). En castellano: *Modelos de democracia. Formas de Gobierno y resultados en treinta y seis países* (Barcelona: Editorial Ariel S.A., 2000).
17. Shugart, Matthew Soberg y Carey, John M. *Presidents and Assemblies. Constitutional Design and Electoral Dynamics* Cambridge: Cambridge University Press, 1992); Cheibub, José Antonio, *Presidentialism, Parliamentarianism, and Democracy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007); Zovatto, Daniel y Orozco Henríquez, J.Jesus, «Reforma política y electoral en América Latina 1978-2007: lectura regional comparada», en: Daniel Zovatto y J, Jesús Orozco Henríquez (eds.) *Reforma política y electoral en América Latina 1978-2007* (México: Universidad Autónoma de México-IDEA Internacional, 2008), pp. 3- 209.
18. Por ejemplo, un ambicioso programa de construcción de salas cunas.
19. Matizó este criterio designando al hijo del expresidente, Ricardo Lagos Weber, ministro secretario general de Gobierno. Cuatro ministros de Aylwin —de Interior, Defensa, Minería y Mideplan— habían sido antes ministros en el Gobierno de Eduardo Frei y un quinto —Secretario General de la Presidencia— fue director de presupuestos en esa administración. El de Relaciones Exteriores, del PRSD, había sido Contralor General de la República en esos años. Lagos nombró tres ministros del gabinete de Frei, el

de Justicia había sido subsecretario de esa cartera durante la administración de Frei y el de Trabajo, fue subsecretario general de la presidencia de Aylwin.

20. Este criterio fue flexibilizado cuando en noviembre de 2007, luego de la renuncia de Lagos Weber (PPD), nombró a un ex ministro de Lagos, Francisco Vidal (PPD), que había ejercido con brillo esta cartera.

21. Repetto, Andrea, «Desigualdad del ingreso y oportunidades en Chile», en: Patricio Meller (editor) *La paradoja aparente. Equidad y eficiencia: Resolviendo el dilema*. (Santiago: Taurus, 2005). pp. 409-436.

22. Barómetro CERC, Octubre 2007.

23. Rueschemeyer, Dietrich, «Addressing inequality», *Journal of Democracy*, vol. 15, Nr. 4, Octubre 2004, pp. 76-90.

24. He desarrollado estas ideas en Huneeus, Carlos, «Las desigualdades en el Chile de hoy: una aproximación política», Informe Nr.471, 1 Junio 2005, en: www.asuntospublicos.org.

25. Barómetro CERC, julio de 2007

26. Huneeus, *The Pinochet Regime*, cap. 9.

27. Engel, Eduardo; Fischer, Ronald y Galetovic, Alexander, «Privatizing Highways in Latin America: Fixing What Went Wrong», *Economía* 2003, pp. 129-164.

28. Lijphart, *Patterns of Democracy*.

29. Desarrollamos esta idea apoyado en una amplia serie de tiempo de encuestas del CERC desde 1986, Carlos Huneeus, *Chile, un país dividido. La actualidad del pasado*. (Santiago: Catalonia, 2003)

30. En la elección del 2005, el presidente de RN, Sergio Díez, había sido embajador en las Naciones Unidas (1977-1981); el presidente la UDI, el

senador Jovino Novoa fue subsecretario general de Gobierno (1979-1982).

31. Entre los senadores se encontraba un ex director general de Carabineros desde 1985, un edecán de Pinochet, que fue después comandante en jefe de la Armada en democracia, y el ex ministro de Interior en los plebiscitos de 1980 y 1988.

32. Esto lo he desarrollado en otro lugar, Huneeus, Carlos y Fabiola Berríos, «El Congreso en el presidencialismo. El caso de Chile», *Revista SAAP. Publicación de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político*, Vol. 2, N.º 2, Septiembre 2005, pp. 345-391.

33. Andrés Allamand, *El desalojo. Por qué la Concertación debe irse el 2010* (Santiago: Randon HouseMondadori, 2007).

34. Ley 19.882 de 23 de junio de 2003.

35. Carlos Huneeus, «La transición a la democracia en España. Dimensiones de una política consociacional» en: Julián Santamaria (ed.), *Transición a la democracia en el sur de Europa y América Latina* (Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1982), pp.243-286; *La Unión de Centro Democrático y la transición a la democracia en España* (Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas- Siglo XXI Editores, 1985).

36. RN y la UDI han aumentado su votación, desde un 34% en 1989 al 38,7% en 2005.

37. Carlos Huneeus, «El PDC en las elecciones del 2005», en: Huneeus, Berríos y Gamboa, (eds.) *Las elecciones chilenas de 2005*, pp. 79-99.

38. Sólo hay financiamiento público a las campañas electorales.

39. Huneeus, Carlos (compilador), *La Reforma al Sistema Binominal en Chile* (Santiago: Konrad Adenauer Stiftung-Catalonia, 2006).